



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SALA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, 18 de marzo de dos mil veinticuatro (2024)**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>PROCESO:</b>    | <b>PROCESO ORDINARIO</b>                       |
| <b>REFERENCIA:</b> | <b>SOLICITUD APLICACIÓN AUTO 1942 DE 2023.</b> |
| <b>DEMANDANTE:</b> | <b>COMFENALCO</b>                              |
| <b>DEMANDADO:</b>  | <b>MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL</b>         |
| <b>RADICADO:</b>   | <b>050013105 – <u>013-2016-00312-01</u></b>    |

Dentro del proceso presentado por **COMFENALCO** en contra del **MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL**, la apoderada de la parte demandante solicita<sup>1</sup> se de aplicación al Auto 1942 de 2023 de la Sala Plena de la Corte Constitucional, aduciendo que este establece la transición para la inaplicación de reglas procedimentales en lo Contencioso Administrativo, en virtud del cambio de jurisdicción en procesos por reclamación de tecnologías no PBS, de conformidad con la regla de decisión fijada por la Corte Constitucional a través del Auto 389 de 2021.

Asimismo, manifestó que, con este cambio de regla de decisión en materia de jurisdicción, se establecieron unas pautas de transición temporales a fin de garantizar la tutela judicial y efectiva de la parte demandante y el derecho de acceso a la jurisdicción.

Por tal motivo, y al considerar que el proceso de la referencia no cuenta con definición previa de competencia por parte del Consejo Superior de la Judicatura, insta a remitirlo, junto con todas las actuaciones realizadas, dentro del plazo de 6 meses otorgado, a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

### **1. Pretensiones de la demanda<sup>2</sup>**

La Caja De Compensación Familiar Comfenalco, formuló demanda ordinaria laboral en contra de la Nación, representada por el Ministerio de la Protección Social; pretendiendo en síntesis que se declare que esta entidad, tiene la obligación legal y constitucional de reconocer y cancelar el valor de los servicios prestados a los afiliados en relación a los medicamentos, procedimientos, intervenciones o

---

<sup>1</sup> CARPETA SEGUNDA INSTANCIA – ARCHIVO 11

<sup>2</sup> CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 02 – PÁGS 1- 22

elementos no incluidos en el plan obligatorio de salud (POS), y como consecuencia de ello, sea condenada al pago de i) TREINTA y CINCO MILLONES DOCIENTOS NOVENTA y OCHO MIL DOCIENTOS CINCUENTA y CINCO PESOS(\$35.298.255) por recobros sobre los servicios prestados a distintos afiliados: ii) el pago de intereses moratorios sobre el capital causado desde que se hizo exigible la obligación hasta la solución o pago total, liquidados a la tasa máxima legal permitida, y iii) costas y agencias en derecho.

## 2. CONSIDERACIONES

Para resolver la solicitud elevada por la parte demandante, cabe precisar que los asuntos en los cuales se discute el recobro de recursos por concepto de insumos no PBS suministrados a los afiliados, se entendían como una controversia relacionada con la seguridad social. Algunos de estos procesos fueron dirimidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en los cuales se determinó en su momento que serían conocidos por la Jurisdicción Ordinaria Laboral. Con respecto a los procesos que no fueron dirimidos, estableció la Corte Constitucional mediante Auto 389 de 2021 y posteriormente en Auto 1942 de 2023 que serían competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. En el primero de estos manifestó:

*“53. Con fundamento en lo anterior, la Corte dirimirá el conflicto de jurisdicciones de la referencia declarando que le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer el proceso ordinario laboral promovido por Sanitas S.A. en contra de la ADRES. En consecuencia, le remitirá el expediente al Juzgado 61 Administrativo del Circuito de Bogotá para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión.*

### **Regla de decisión**

**54 el conocimiento de los asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el POS, hoy PBS, corresponde a los jueces contencioso administrativos, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto a través de estos se cuestiona por parte de una EPS un acto administrativo proferido por la ADRES. (...)** (Subrayas y negrillas por fuera de texto original).

En los mismos términos, la Corte Constitucional mediante auto 905 del 3 de octubre de 2021, precisó:

*“Por lo anterior, la jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer de un asunto de recobro judicial dirigido contra el Ministerio de Salud y Protección Social. Esto, en la medida en que i) la ADRES está adscrita a aquella entidad; ii) asumió la defensa en los procesos judiciales que estaban a cargo de la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social; y iii) le fueron transferidos todos sus derechos y obligaciones. Por lo tanto, en la actualidad es la encargada de asumir lo relacionado con los recobros tramitados ante ese Ministerio.*

*En suma, las consideraciones expuestas en el Auto 389 de 2021 son aplicables a los casos de recobros judiciales en los que el demandado es el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo expuesto, porque se trata de un asunto económico que no se relaciona, en estricto sentido, con la prestación de servicios de la seguridad social y no involucra a afiliados, beneficiarios o usuarios ni a empleadores. **Adicionalmente, cuestiona actos administrativos que devolvieron o glosaron el pago de facturas entre***

**entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuyo control les corresponde a los jueces contencioso-administrativos, de conformidad con lo señalado en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011".** (Negrillas fuera de texto)

De lo anterior, se concluye que el conocimiento de los asuntos en los cuales se debatan pretensiones sobre recobros, corresponde a los jueces contencioso administrativos.

Por otra parte, mediante Auto 1942 de 2023, proferido por la Sala Plena de la Corte Constitucional, se establecieron las reglas de transición aplicables debido al cambio jurisprudencial suscitado en conflictos de jurisdicciones relativos al pago de recobros judiciales, con el fin de evitar la imposición de cargas adicionales gravosas a la parte demandante y evitar la vulneración de los derechos al acceso a la administración de justicia al debido proceso y a las garantías de la confianza legítima, la seguridad jurídica y la prevalencia del derecho sustancial. La mencionada providencia destacó lo siguiente:

**"40. Visto el anterior panorama, en especial las dificultades que ha generado el cambio de jurisprudencia del Auto 389 de 2021 para aquellos demandantes que hayan optado o llegaren a optar por los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho o de reparación directa y que no logren cumplir los presupuestos procesales atinentes al agotamiento de recursos administrativos (nulidad y restablecimiento) y la conciliación extrajudicial, así como formular la demanda dentro del término de caducidad (cuatro meses o dos años[49]), la Sala Plena estima no solo necesario, sino también prudente, adoptar una decisión con efectos temporales que facilite la transición frente al cambio jurisprudencial suscitado en relación con la jurisdicción competente para conocer los recobros judiciales al Estado por prestaciones de servicios de salud no incluidos en el plan obligatorio de salud (Auto 389 de 2021).**

**41. Lo anterior, con la finalidad de evitar la imposición de una carga excesivamente gravosa a la parte demandante en este tipo de procesos, especialmente en lo que respecta a sus derechos al debido proceso, de acción y de acceso a la jurisdicción, así como a las garantías de confianza legítima, seguridad jurídica y la prevalencia del derecho sustancial como fin principal de la administración de justicia;** mandatos superiores que, según lo expuesto en los párrafos 10 a 12 de la presente providencia, pueden resultar menoscabados con la eventual inadmisión o rechazo de la demanda derivados del incumplimiento de los presupuestos de procedencia[50] y del término de caducidad o, con la expedición de decisiones inhibitorias.

(...)

**56. Así, como se ha indicado, el actual auto únicamente pretende adoptar unas medidas con carácter excepcional y temporal que faciliten la implementación o adaptación al cambio de precedente a los sujetos procesales que obraron bajo la confianza legítima de que sus decisiones se ajustaban a la línea jurisprudencial vigente y que eventualmente desconocen el cambio que introdujo el Auto 389 de 2021.**

**57. De acuerdo con lo expuesto, es necesario fijar unas reglas de transición para un universo determinado de casos, es decir, las demandas que:**

**(a) Se encontraban en trámite ante la jurisdicción ordinaria laboral al momento de la expedición del Auto 389 de 2021; sin embargo, tras el cambio de precedente se remitieron a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en esta sede judicial se adoptó una decisión de rechazo o inadmisión, de acuerdo con lo expuesto en los párrafos 40 y 41 de la presente providencia.**

(b) **Se encontraban en trámite ante la jurisdicción ordinaria laboral al momento de la expedición del Auto 389 de 2021 y/o se encuentran en trámite al expedir la presente providencia y, como consecuencia del cambio introducido por el Auto 389 de 2021, el juez ordene su remisión hasta seis (6) meses después de la publicación de este auto a la jurisdicción de lo contencioso administrativo**, y en esa sede judicial se deba adoptar una decisión de rechazo o inadmisión, de acuerdo con lo expuesto en los párrafos 40 y 41 de la presente providencia.

(c) Se formularon ante la jurisdicción contencioso administrativa con posterioridad a la expedición del Auto 389 de 2021 y fueron inadmitidas o rechazadas por incumplir con los requisitos de procedibilidad según el medio de control elegido por el accionante.

(d) Se formularon ante la jurisdicción contencioso administrativa con posterioridad a la expedición del Auto 389 de 2021 y se encuentran en trámite al momento de la expedición de la presente providencia y en esa sede judicial se deba adoptar una decisión de rechazo o inadmisión, de acuerdo con lo expuesto en los párrafos 40 y 41 de la presente providencia.

(e) Se inicien hasta seis (6) meses después de la publicación por parte del Consejo Superior de la Judicatura que se dispondrá en la parte resolutive.

(...)

70. Adicionalmente, el artículo 9 de la citada Ley 270 de 1996 prevé que “es deber de los funcionarios judiciales respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso (...)”. **Lo expuesto permite resaltar la importancia de la función que recae en los jueces laborales que tengan a su cargo asuntos relacionados en el literal b del universo de casos, de remitir a la jurisdicción contencioso administrativa los correspondientes expedientes dentro de los 6 meses siguientes a la expedición de esta providencia, de cara a la efectiva materialización de los derechos de la parte demandante en este tipo de trámite y a la garantía del cumplimiento general de los fines de la presente providencia y de los plazos señalados para la aplicación de la transición** (párrafos 58 a 61)”.

De acuerdo con lo expuesto, es claro que el presente asunto se encontraba en trámite al momento de la expedición de los Auto 389 de 2021 y 1942 de 2023, por lo que en atención del cambio introducido por el Auto 389 de 2021, y toda vez que nos encontramos dentro de los seis meses contados desde la publicación del auto 1942 de 2023<sup>3</sup>, se ordenará enviar las diligencias a la jurisdicción contenciosa administrativa.

Finalmente, se indica que en este proceso no existe pronunciamiento alguno del Consejo Superior de la Judicatura por lo que no estamos frente a la imposibilidad señalada en el numeral 76 del Auto 1942 de 2023.

“76. (vii) **En cuanto a la exclusión de los casos en los que exista decisión del Consejo Superior de la Judicatura con efectos de cosa juzgada. Las medidas transitorias que aquí se establecerán no tendrán aplicación para los procesos en los que el Consejo Superior de la Judicatura haya dirimido un conflicto entre jurisdicciones indicando que la autoridad judicial competente era la ordinaria, especialidad laboral.** Lo anterior, toda vez que en el Auto 711 de 2021, la Corte precisó que, previo a la modificación constitucional del Acto Legislativo 02 de 2015, la función de resolver los conflictos entre distintas jurisdicciones correspondía al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. En ese sentido, estableció que las decisiones proferidas por esa entidad gozan del principio de intangibilidad y no pueden ser revocadas o reformadas.

---

<sup>3</sup> La publicación ocurrió el 5 de octubre de 2023  
[https://www.ramajudicial.gov.co/novedades/-/asset\\_publisher/WZ08QsrlwrCu/content/corte-constitucional-sala-plena](https://www.ramajudicial.gov.co/novedades/-/asset_publisher/WZ08QsrlwrCu/content/corte-constitucional-sala-plena)

77. En el mismo sentido, en el Auto 866 de 2022, la Corte destacó el respeto que se debe tener por las decisiones tomadas por los jueces en ejercicio de sus funciones, "porque la cosa juzgada es un elemento integrante del derecho al debido proceso judicial; además, materializa el principio de seguridad jurídica". Así, concluyó que, la cosa juzgada obliga a que no se reabran nuevas discusiones sobre lo decidido y no se desatiendan las decisiones dictadas por los jueces competentes para el efecto.

78. De este fenómeno jurídico se deriva entonces la prohibición a los funcionarios judiciales de proveer nuevamente sobre lo ya resuelto, de manera que no resulta posible que, como consecuencia de la expedición del Auto 389 de 2021 o de la presente providencia se pretenda reabrir debates que ya fueron resueltos por el Consejo Superior de la Judicatura, incluso, si la decisión fue contraria a la establecida en el referido Auto 389." **(Subrayas por fuera de texto original)**

De acuerdo a lo expuesto se **ACCEDERÁ** a la petición realizada por la parte demandante y se **ORDENA REMITIR** el proceso al Tribunal Administrativo de Antioquia para continuar con su trámite.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**La Magistrada,**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE  
MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados  
N ° 040 del 19 de marzo de 2024

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-Medellín-sala-laboral/125>